

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 28 de febrero de 2020.Auto interlocutorio No 200**MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO**

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
REFERENCIA:	76111-33-33-002-2018-00208-02
ACCIONANTE:	SURY ANAIS MOLINA RENGIFO
ACCIONADO:	NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO:	AUTO QUE DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO DEL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVA DE BUGA

AUTO QUE DECIDE IMPEDIMENTO

Decide la Sala el impedimento manifestado por la Jueza Segunda Administrativa Oral de Buga para conocer de la demanda interpuesta por Humberto Domínguez Moran y otros contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

ANTECEDENTES

1. Humberto Domínguez Moran y otros, mediante apoderado judicial y por el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para que se declare la nulidad de los actos administrativos contenido en las Resoluciones DESAJCLR18-7677 del 05 de diciembre de 2018 y DESAJCLR18-7458 del 16 de noviembre de 2018 suscrita por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, y del acto ficto o presunto, producto del recurso de apelación interpuesto contra la citada resolución que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales devengadas y de aquellas que se causen a futuro.

2. El juez segundo administrativo oral de Buga se declaró impedida para conocer del asunto, porque, a su juicio, se configura la causal prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP. Textualmente dijo¹:

(...)

Como se indicó, la parte actora solicita la reliquidación de las prestaciones luego de aplicar la bonificación judicial como un verdadero factor salarial para todos los efectos, bonificación que ha sido creada para los servidores públicos de la Rama Judicial por el Decreto 382 del 06 de marzo de 2013.

(...)

Ahora bien, al verificar el contenido de los referidos Decretos, logra constarse que los mismos guardan identidad desde la fecha misma de su reconocimiento, así como el ajuste equivalente a la variación proyectada del I.P.C., que en ambos casos es del 2% respecto del valor de la bonificación, también en las disposiciones del artículo 2º en ambos Decretos alude el reconocimiento de la diferencia respectiva a título de bonificación judicial a los

¹ Folio 27 frente y vuelto

Radicación: 76001-33-33-002-2018-00208-02
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante: SURY ANAIS MOLINA RENGIFO
Demandado: NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

funcionarios que no optaron por los regímenes establecidos tanto en el Decreto 53 de 1993, para los servidores de la Fiscalía General de la Nación como en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 en cuanto a los funcionarios de la Rama Judicial, el monto de la bonificación a pagar mensualmente a pagar respecto del cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito son aproximadamente iguales, así como similitud en la liquidación de constituirse como factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema de seguridad social en salud sin ningún tipo de justificación.

Al respecto, considero que estas semejanzas en la bonificación judicial de los servidores de la Rama Judicial, independientemente de quien se encuentre en un Decreto especial para la Fiscalía General de la Nación, permiten dar por acreditado el impedimento planteado, como quiera que si en el actual proceso se busca otorgarle carácter salarial a la bonificación judicial, el pronunciamiento que se haga me beneficiaría indiscutiblemente porque los criterios me favorecen para solicitar el carácter salarial de la misma bonificación que devengo actualmente en calidad de Juez, es decir, que tengo un interés indirecto en las resultas del proceso, y en razón a ello se encuentra afectada mi imparcialidad para definir la situación en concreto.

La referida causal, consiste en tener interés directo o indirecto en las resultas del proceso, en sentir de este titular está llamado a afectar la objetividad e imparcialidad que deben primar en estos asuntos (...)"

CONSIDERACIONES

Competencia

Este Tribunal es competente para conocer del impedimento manifestado por el juez segundo administrativo oral de Buga, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131 del CPACA, que prevé:

Artículo 131. Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas:

(...)

2. Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.

El caso concreto

Descendiendo al caso bajo estudio, la Sala considera que las pretensiones de la demandante van encaminadas a que, como empleada de la Fiscalía General de la Nación, se le reconozca que la bonificación judicial que percibe es factor salarial.

Haciendo un análisis comparativo de la situación en que están inmersos tanto los empleados de la Fiscalía General de la Nación, acorde a lo contemplado en el Decreto 382 de 2013 en cuanto al carácter de la bonificación judicial, el cual pretende que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, como para los empleados y funcionarios de la Rama Judicial a los cuales se les ha establecido una estipulación jurídica similar según lo contenido en el Decreto 383 de 2013 respecto a que "constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud", veamos:

Radicación: 76001-33-33-002-2018-00208-02
 Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
 Demandante: SURY ANAÍS MOLINA RENGIFO
 Demandado: NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

RAMA JUDICIAL	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Artículo 1° del Decreto 383 de 2013	Artículo 1° del Decreto 282 de 2013
<p>Artículo 1. Créase para los servidores de la <u>Rama Judicial</u> y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Subrayado y negrillas fuera del texto)</p>	<p>Artículo 1°. Créase para los servidores de la <u>Fiscalía General de la Nación</u> a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Subrayado y negrillas fuera del texto)</p>

Acotando el presente asunto lo que se debe analizar jurídicamente es si es viable que la bonificación judicial sea tenida en cuenta o no, solo, como base de cotización a los Sistemas Generales de Pensiones de Seguridad Social en Salud, o si por el contrario se debe tener como factor salarial para efectos de la liquidación de todas las prestaciones sociales.

En conclusión, le asiste la razón al juez segundo administrativo oral de Buga, toda vez que, como funcionario de la Rama Judicial, también percibe la bonificación de que trata el Decreto 383 de 2013, por lo que la decisión que se profiera en el proceso de la referencia puede afectar su imparcialidad.

Así mismo, se configura la causal de impedimento manifestada por el juez segundo administrativo oral de Buga, sobre la totalidad de los jueces administrativos del mismo circuito, debido a que tienen un interés directo en las resultas del proceso.

Así las cosas, se declarará fundado el impedimento manifestado, que, como se dijo, comprende la totalidad de jueces administrativos de ese circuito, por lo que se debe proceder, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 131 del CPACA, a que por la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo del conjuer al que se le asignará el conocimiento de la demanda.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en Sala de Decisión,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento formulado por el juez segundo administrativo oral de Buga, extensivo a los demás jueces administrativos de Cali, para

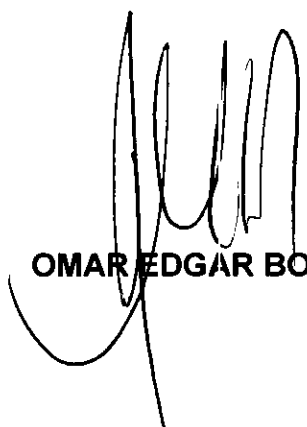
Radicación: 76001-33-33-002-2018-00208-02
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LABORAL
Demandante: SURY ANAIS MOLINA RENGIFO
Demandado: NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

conocer el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR que por medio de la Presidencia de esta Corporación se realice el sorteo para el nombramiento del conjuez que conocerá el presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,


OMAR EDGAR BORJA SOTO


OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA


EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

SE CUMPLIÓ CON EL PROVEÍDO